PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

- Zorrilla amenaza
- Acusado o acusador

Rogelio Hernández López, reportero de un diario capitalino, interesado en la investigación del asesinato de don Manuel Buendía como pocos de sus compañeros de profesión, denunció haber recibido amenazas de José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la policía política, y ex secretario particular de don Fernando Gutiérrez Barrios, titular de Gobernación, cuando éste fue subsecretario del propio ministerio, hace quince años. Formalizada que sea la denuncia ante el ministerio público, no deberá caer sobre ese delito la impunidad de que disfrutaban los homicidas del 30 de mayo de 1984. ■ 4

HOY LUNES 5
DE JUNIO DE 1989

Viene de la 1

Han incomodado a Zorrilla Pérez, al parecer, las repetidas referencias a su nombre formuladas en diversos medios, acerca de su presunta implicación en la muerte del periodista de quien era amigo, y cuyo sepelio organizó sin que el resto de los deudos de la víctima sintieran necesidad o posibilidad de disputarle o impedirle desempeñar ese papel, o de preguntarse por qué lo asumía de modo tan natural. Es inevitable que su nombre quede asociado al crimen, no sólo por su amistad con don Manuel, sino especialmente por la circunstancia de que en esa calidad, hubiera recibido pronto un llamado telefónico que le permitió encabezar el primer grupo policiaco que llegó a la escena del homicidio, e iniciar las averiguaciones. Este último extremo lo ejerció Zorrilla Pérez *motu proprio*, horas antes de que el Presidente de la República, quizá obrando mecánicamente por el hecho de verlo en papel protagónico durante el velatorio en la agencia Gayosso de Félix Cuevas, le encargó una investigación para la cual no estaba formalmente acreditado, a menos que desde

ese momento se considerara la muerte del periodista como un asunto concerniente a la seguridad nacional, como pudo ser. No obstante, después la policía judicial del Distrito se abocó al caso, como corresponde según la ley, y su primer esfuerzo estuvo encaminado a justamente lo contrario: desvanecer la idea de que se trataba de un crimen político, del que por ello hubiera podido ocuparse la policía política, es decir, la Federal de Seguridad.

A fines de mayo de 1987, el procurador Renato Sales Gasque pronunció por primera vez el nombre de Zorrilla como relacionado con el crimen, no como amigo ni investigador, sino como presunto responsable. Zorrilla había desaparecido de la escena pública desde que, en un incidente jamás explicado y que por ello proyecta una sombra sobre el ex director de Seguridad, perdió la candidatura a diputado, a que lo había postulado el PRI, por segunda vez en su vida. En mayo de 1985, en efecto, faltando casi un mes para los comicios, Zorrilla, que en febrero había renunciado a su cargo en Gobernación para realizar su campaña en el primer distrito hidalgüense, se au-

sentó abruptamente. En los días en que dejó de ser el responsable de la policía política, un agente de narcóticos norteamericano, Enrique Camarena Salazar, había sido asesinado, y ese hecho desencadenó un escándalo internacional en que fueron involucrados miembros de la corporación hasta entonces dirigida por Zorrilla. Dejada en el misterio su renuncia a la candidatura, se abrió el espacio a las conjeturas, que no tardaron en vincular a Zorrilla con episodios relacionados con el tráfico de drogas y sus secuelas criminales.

Sin embargo, Zorrilla acudió al llamado que el fiscal especial para procurar justicia en el crimen de Buendía le formuló. Se presentó los días 4 de marzo y 25 de mayo de 1988. Poco antes de su primera comparecencia había publicado un resumen de su posición ante el caso en el periódico *Excelsior*, en que trabaja Rogelio Hernández, el reportero a quien ahora ha amenazado.

Las declaraciones de Zorrilla ante el fiscal especial están llenas de contradicciones y de afirmaciones pueriles. Ejemplo de esto último lo constituye su respuesta a la pregunta de por qué no entregó al

ministerio público los proyectiles recogidos del lugar de los hechos: "La policía judicial nunca me requirió para que hiciera entrega formal de esos proyectiles", requerimiento innecesario para un policía, y sobre todo para alguien presuntamente interesado en conducir a buen resultado la indagación. Ejemplo de lo primero es su negativa de el agente Luis Héctor García Ruiz, miembro de su escolta en el momento del crimen, haya estado presente en el lugar de los hechos, lo que se contrapone con la declaración del agente, quien circunstancialmente da cuenta de las instrucciones recibidas, allí mismo, de Zorrilla sobre qué documentación buscar entre las ropas del cadáver.

No es nuestra intención abundar ahora sobre la implicación de Zorrilla en el homicidio de don Manuel. Si es del caso, la ocasión llegará. Pero la que ya está aquí es la relacionada con las amenazas, que constituyen delito, respecto del cual no han pasado cinco años sino sólo unos días. Esperemos que el ministerio público no demore tanto en llamar al ex candidato a diputado para la averiguación previa que corresponde. O para que Zorrilla pase de acusado a acusador, si es que se le difamó.